



Intermon
Oxfam

Mujeres y desarrollo: respuestas a la globalización



Editado por Joanna Kerr
y Caroline Sweetman

COOPERACIÓN

CUADERNO

333

No. DE INVENTARIO	114024	X
FECHA		
PROCEDENCIA	Controversia 06	23
CLASIFICACION	305.4333	MUJ
No. DE SISTEMA	241496	

Mujeres y desarrollo: respuestas a la globalización

Dirección colección: Ariane Arpa

Traducción: Ana M^a Cadarso

Coordinación producción: Elisa Sarsanedas

Diseño cubierta: Loni Geest

Women reinventing globalisation

Primera edición en 2003 en Reino Unido por Oxfam GB,

274 Banbury Road, Oxford OX27DZ, RU

www.oxfam.org.uk/publications

1^a edición: noviembre 2003

© Fotografía cubierta: Oxfam

© Versión española: Intermón Oxfam

Roger de Llúria, 15. 08010 Barcelona

Tel (93) 482 07 00. Fax (93) 482 07 07

e-mail: IntermonOxfam@org

ISBN: 84-8452-238-5

Depósito legal: 48.233-2003

Impresión: Limpergraf

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.

Impreso en papel exento de cloro.

305-4333
MUT

Presupuestos en clave de género y después de ellos: política tributaria feminista en el contexto de la globalización

Niliifer Çagatay

Las teorías y las políticas macroeconómicas en general y las políticas tributarias en particular, raramente son no sexistas. Desde mediados de los años ochenta, el análisis de los presupuestos en clave de género, que han llevado a cabo numerosos países, ha sido una estrategia fundamental para cuestionar la teoría macroeconómica y la formulación de políticas. Estas iniciativas, junto con diversas iniciativas presupuestarias en pro de los pobres, constituyen el principal desafío a la postura fiscal dominante en muchos países. El objetivo de este trabajo es analizar los cambios que se han producido en la postura fiscal, en el contexto de la liberalización y la globalización, con el fin de extraer sus implicaciones para la desigualdad social, especialmente para la desigualdad entre los sexos. El artículo finaliza analizando diversas posturas de sensibilización política, abiertas a las activistas feministas, para que sirvan de base al trabajo de las iniciativas presupuestarias en clave de género.

Del consenso keynesiano al Consenso de Washington

En el periodo de posguerra, la formulación de políticas macroeconómicas reflejaba el “consenso keynesiano”, que subrayaba el papel del Estado en la generación de empleo, el crecimiento y la redistribución. En las economías del Sur, el Estado del desarrollo asumió un papel destacado para estimular el crecimiento por medio de la inversión. Se reconoció que el Estado debía tener un papel activo para contrarrestar el efecto de los defectos del mercado, o la simple ausencia de mercados. El planteamiento keynesiano reconocía asimismo que las economías capitalistas tienden a las crisis económicas y pasan por ciclos. La

política fiscal, sobre todo en las economías del hemisferio Norte (los países desarrollados), estaba pensada para contrarrestar los altibajos del ciclo. Algunas formas de gasto del Estado, como las prestaciones de desempleo, se denominaban “estabilizadores automáticos” porque contribuían automáticamente a contrarrestar los efectos de las reducciones de la actividad económica y aumentaban el empleo durante las recesiones económicas, y disminuían cuando la economía salía de la recesión.

A finales de los años setenta y en los ochenta, en parte a raíz del aumento de los precios del petróleo y la subsiguiente crisis de la deuda, los déficits presupuestarios se volvieron insostenibles e inflacionarios. En el Sur se adoptaron políticas de estabilización macroeconómica, conjuntamente con políticas de ajuste estructural (PAE). El propósito de estas políticas era minimizar el papel del Estado, que había empezado a considerarse “ineficiente”. El “Consenso de Washington”, con su insistencia en la liberalización del mercado, sustituyó al “consenso keynesiano” anterior; se introdujeron diversas políticas de liberalización del mercado, como la liberalización comercial, la liberalización financiera, la “desregulación” del mercado laboral y la liberalización de las cuentas de capital. En los años ochenta, también se adoptaron conjuntos de políticas similares en las economías de los países industrializados. En los noventa, las economías de transición hicieron lo mismo al amparo de la rúbrica de la reestructuración económica. El objetivo inmediato de estas políticas era lograr la estabilización macroeconómica, que se consideraba fundamental para conseguir un crecimiento sostenido. El objetivo general era reducir el papel del Estado en la vida económica.

La política fiscal¹ se reorientó en general hacia la lucha contra la inflación y la reducción de los déficits en cuenta corriente. Un país tras otro, redujeron el gasto público, sobre todo en los sectores sociales, para conseguir el equilibrio fiscal. Como se pensaba que el Estado estaba desplazando al “eficiente” sector privado, se redujo el empleo en el sector público y la privatización de los servicios públicos se convirtió en un objetivo político fundamental.

1. Política fiscal es la política relativa a los ingresos del Estado, en particular, impuestos y gastos.

Se adoptaron cuotas de usuario para aumentar el rendimiento de la prestación de servicios públicos y elevar los ingresos. Para resultar creíbles a los inversores financieros, los gobiernos tuvieron que mantener bajos los déficits presupuestarios y los tipos de interés altos, lo que introdujo una tendencia deflacionaria (es decir, una tendencia a favor de la deflación) en la economía mundial. Se esperaba que todas estas políticas produjeran un crecimiento sostenible, mayor rendimiento y beneficios que mejorarían el bienestar de todos, gracias al goteo de riqueza.

Los datos de los últimos veinte años muestran que las políticas de liberalización del mercado no han respondido en muchos frentes. Aunque las balanzas fiscales de muchos países mejoraron, bajaron las tasas de inflación y el comercio internacional y los flujos de inversión se incrementaron enormemente, la promesa de unas tasas de crecimiento altas y sostenidas no se ha materializado. Las tasas de crecimiento mundial inferiores de la economía mundial (comparadas con su trayectoria de las décadas anteriores) reflejan la tendencia deflacionaria de las políticas económicas actuales. En muchas economías latinoamericanas y de África subsahariana, las tasas de crecimiento durante las dos últimas décadas fueron muy reducidas y el comportamiento macroeconómico se caracterizó en general por ciclos de expansión y recesión. La crisis que padecieron los países del este de Asia, a finales de los años noventa, dio cuenta cabal de que incluso las economías “milagrosas” de Extremo Oriente, que habían experimentado unas tasas de crecimiento elevadas y sostenidas durante tres décadas, no eran inmunes a las crisis profundas. La economía mundial se hizo más volátil a medida que la crisis económica se propagaba de un país a otro a la velocidad del rayo. La integración internacional de las economías nacionales por medio del comercio y los flujos de inversión ha hecho que sea más difícil para los gobiernos el proteger sus economías de las crisis que estallan en otras economías.

El aumento de movilidad de los flujos de capital, a corto plazo, implica que unos cuantos inversores financieros podrían causar estragos en la economía mundial, trasladando los fondos de un país a otro en un corto periodo de tiempo. Esta vulnerabilidad ha provocado inseguridad. Al mismo tiempo, la desigualdad se ha incrementado en numerosos países, tanto entre los

hogares como entre el capital (propietarios de negocios) y la mano de obra (sus trabajadores), y entre los diferentes segmentos de trabajadores (trabajadores muy especializados frente a trabajadores no especializados). El número de personas que vive en la pobreza ha ascendido o se mantiene constante en muchos países. (Van der Hoeven 2000; PNUD 1999, Milanovic 2003).

Un peligro doble: el recorte fiscal

Tal como se ha esbozado más arriba, muchas de las políticas de liberalización aplicadas por los programas de estabilización macroeconómica y las PAE han acarreado un recorte fiscal por la presión que han ejercido sobre los presupuestos públicos (Grunberg 1998). Por el flanco de los ingresos, la liberalización del mercado se ha traducido en una erosión de los ingresos públicos, como explico más adelante; por el lado del gasto, el efecto del recorte fiscal es que han aumentado la inseguridad y vulnerabilidad económicas, porque incrementar la volatilidad de los mercados induce un aumento de la demanda de protección social (Rodrik, 1997). La forma preferida de poner fin a los déficits ha sido reducir el gasto.

En particular, el Consenso de Washington ha supuesto los efectos siguientes sobre los ingresos:

Impuestos sobre el comercio

Los impuestos sobre el comercio, que suponían alrededor de un tercio de los ingresos públicos en muchos países de bajos ingresos, se han reducido considerablemente con la liberalización comercial (Grunberg, 1998; PNUD, 2003). La competencia entre los Estados para atraer la inversión extranjera directa se ha traducido en una reducción de los impuestos a las empresas y a las ganancias del capital. Por ejemplo, en los países de la OCDE,²

2. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es una organización internacional que ayuda a 30 Estados miembros (casi todos de los países desarrollados) a hacer frente a los desafíos económicos, sociales y de gobierno que plantea una economía globalizada.

todos los países, salvo dos, redujeron sus tipos en el tramo de impuestos superior a finales de la década de los ochenta. (PNUD, 1999, 3). Por lo tanto, disminuyó la carga impositiva sobre los propietarios de capital. Al mismo tiempo, muchos países han introducido zonas de manufactura de productos para la exportación en las que las empresas están exentas de impuestos. Lo que ha significado un desplazamiento de la carga impositiva de los propietarios de empresas, cuyos fondos son cada vez más móviles, a los trabajadores, que son relativamente inmóviles (excepto los trabajadores muy especializados). Una implicación de estos fenómenos es que la carga impositiva se ha ido desplazando además de los hombres a las mujeres, ya que las mujeres tienen y controlan mucha menos propiedad que los hombres en todo el mundo, aunque se desconocen las cifras exactas.

Ningún aumento en ayuda oficial para el desarrollo

La ayuda oficial para el desarrollo (AOD), que constituye una fuente de ingresos importante para algunos de los países más pobres, no ha aumentado porque muchos países industrializados no han cumplido su compromiso de canalizar el 0,7% de su PNB para ayuda al desarrollo.

Introducción de impuestos indirectos y cuotas de usuario

En su afán por incrementar los ingresos, varios países han reformado el sistema de recaudación de impuestos y han instituido impuestos de valor añadido o introducido cuotas de usuario para algunos servicios públicos, lo que ha supuesto que la gente que vive en la pobreza tenga que soportar una carga impositiva mayor.

Privatización y ventas de activos públicos

Ambos, la privatización y las ventas de activos públicos para incrementar los ingresos, se han convertido en un método importante, pero insostenible, de los estados para acabar con los déficits presupuestarios.

En la vertiente del gasto, se observa lo siguiente:

Aumento de la demanda de gasto público, pero menos recursos

El aumento de la volatilidad, la inseguridad y la desigualdad de ingresos se han traducido en un aumento de la demanda de gasto público en forma de protección social. Pero como muchas economías han seguido soportando una elevada carga de deuda, el servicio de esta deuda ha dejado pocos recursos para la provisión de sanidad, educación y otras necesidades. La iniciativa para los países pobres muy endeudados no ha conseguido proporcionar gran ayuda a esas economías, ya que la redención de la deuda estaba supeditada a la aplicación de una "política macroeconómica sólida". Algo que de hecho significa la adopción del modelo del Consenso de Washington, aunque con algunas modificaciones recientes para hacer más hincapié en la pobreza y la reforma de las instituciones. Los planes estratégicos de reducción de la pobreza siguen insistiendo en el mismo tipo de estrategias macroeconómicas.

Continua pérdida de recursos públicos a causa de la corrupción

Ha continuado el despilfarro de recursos públicos debido a la corrupción. La privatización, que supuestamente serviría para reducir los gastos y la ineficiencia del Estado, además de para frenar la corrupción, se ha convertido en una nueva vía de corrupción.

Continúan los elevados niveles de gasto militar

La política de la Guerra Fría y la persistencia de su legado de militarismo en el Norte y el Sur, y las actividades de los traficantes de armas implican que el gasto militar haya seguido siendo importante en muchos países. El dividendo de paz que se esperaba acompañaría al fin de la Guerra Fría no se ha materializado. A pesar de que muchos gobiernos han seguido alejando pobreza, se han resistido a reducir el gasto militar y algunos de los países más pobres del mundo han continuado con el desarrollo de armas nucleares.³

3. Quizás la primacía constante del gasto militar sea un aspecto de la política fiscal que ha seguido siendo "keynesiano", una característica que se denomina keynesianismo militar.

Implicaciones de la reducción del gasto fiscal en el crecimiento, el desarrollo y la igualdad

Estos cambios, que se han producido en la postura fiscal durante las dos últimas décadas, tienen numerosas implicaciones para el crecimiento económico y la igualdad (desde el punto de vista de las relaciones de clase, además de las de género). Están interrelacionados hasta cierto punto. Los recortes en el gasto del Estado y la liberalización del mercado han tenido efectos adversos en la capacidad del Estado para estimular el crecimiento y el empleo, el desarrollo humano y la igualdad social (ECLAC, 1998). Algo que ha tenido profundas implicaciones en la redistribución de los ingresos entre las clases (en detrimento de los trabajadores), y entre mujeres y hombres (en detrimento de las mujeres).

La forma en que un gobierno distribuye su gasto muestra su visión y prioridades económicas, así como el equilibrio de poder entre los diferentes grupos sociales. Las políticas fiscales de la mayoría de los Estados, en los últimos 20 años reflejan el poder cada vez mayor del capital en relación con los trabajadores, por una parte, y de los inversores nacionales y extranjeros frente al resto de la ciudadanía, por otra. Como suelen ser los hombres quienes poseen y controlan una parte mayor del capital en comparación con las mujeres, este hecho también representa el poder económico superior de los hombres en relación con las mujeres.

Sin embargo, el contenido social de las políticas macroeconómicas (Elson y Çagatay, 2000) —es decir, el hecho de que reflejan, y afectan, a la correlación de fuerzas entre los distintos grupos sociales debido a la forma en que influyen en la distribución de recursos— ha quedado oculto porque, durante los últimos veinte años, la formulación de políticas fiscales se ha presentado como una cuestión técnica. Por ello, apenas ha habido un debate fiscal público sobre modelos de imposición y gasto público alternativos y su impacto en los distintos grupos sociales (ECLAC, 1998), lo que se ha traducido en una falta de rendición de cuentas y transparencia. Si bien la credibilidad y la rendición de cuentas fiscales frente a los posibles inversores extranjeros han sido de suma importancia, apenas se reconoce su relevancia para los ciudadanos en general como un aspecto de la democratización económica (Elson y Çagatay, 2000).

Efectos sobre el crecimiento y la estabilidad

1. RADICALISMO DE LAS POLÍTICAS ANTIDÉFICIT

Se afirma que la inflación es perjudicial para el crecimiento económico y que va contra los intereses de los pobres y que, por lo tanto, hay que ajustar los presupuestos para conseguir una tasa de inflación cero. No obstante, este "radicalismo antidéficit" es erróneo: si bien unos niveles de inflación elevados tienen efectos negativos en el crecimiento económico, los niveles de inflación moderados no tienen ese efecto. (Sen, A., 1998; van der Hoeven, 2000). Como la contención de los presupuestos se logra por medio de recortes en los servicios sociales, el radicalismo de las políticas antidéficit pone en peligro el desarrollo, el bienestar, la igualdad social y el crecimiento humano a largo plazo (Sen, A., 1998, Sen, G., 2000). Limitar el gasto público en infraestructuras, que por lo general fomentan la inversión privada, y limitar y/o recortar el gasto en sanidad y educación reducen la igualdad social (ya que es más probable que quienes se benefician de estos servicios sean los segmentos pobres de la población y las mujeres) y el desarrollo humano. Además, estas limitaciones también tienen efectos de reacción negativos en el posible crecimiento a largo plazo de una economía (Sen, A. K., 1998).

Al mismo tiempo, los altos tipos de interés, que están pensados para atraer la inversión extranjera, han puesto freno a la inversión nacional y la generación de empleo por parte del sector privado. Los flujos esperados de inversión extranjera directa sólo se han materializado en unos cuantos países, en su mayoría de Asia, mientras que el coste de los préstamos se ha mantenido elevado para las empresas nacionales.

2. INCAPACIDAD DE MANTENER LA ESTABILIDAD DURANTE LAS RECESIONES ECONÓMICAS

Otro problema relacionado de las dos últimas décadas es que el planteamiento del gasto del Estado en numerosos países ha acentuado los picos y las depresiones del ciclo económico, en vez de compensarlos, como solía suceder durante la época del consenso keynesiano.

A pesar de la consecución de unas tasas de inflación y balanzas fiscales reducidas, que fueron concebidas como elementos importantes para la estabilización de la economía, en el paque-

te de políticas del Consenso de Washington existen otras fuentes de inestabilidad. Las economías nacionales son menos estables potencialmente, debido a la liberalización de los flujos de capital.⁴ Los Estados son incapaces de tomar medidas para estabilizar la economía durante las fases descendentes, en parte porque los organismos económicos multilaterales que controlan los programas de ajuste estructural insisten demasiado en los indicadores del déficit, sin tener en cuenta si la economía está en la fase de alza o descendente de un ciclo (ECLAC, 1998). Es probable que los déficits presupuestarios cambien durante el transcurso de un ciclo; por lo general, aumentan en la fase descendente. Esta práctica de ignorar el impacto del ciclo en el seguimiento de los déficits ha provocado ajustes drásticos con consecuencias negativas para la economía. Por ejemplo, una de las posturas políticas iniciales, formulada por el FMI en respuesta a la crisis de los países del este de Asia (pese a la oposición del Banco Mundial), fue reducir el gasto público (Stiglitz, 2002). Aumentar las restricciones en el gasto del Estado durante una crisis sólo sirve para exacerbar la recesión económica. En las economías con poca o ninguna protección social, las consecuencias distributivas negativas para las personas pobres y, en particular, para las mujeres pobres, son inmensas.

Repercusiones de la liberalización en las cuestiones de género

1. RECORTES EN EL GASTO SOCIAL

La igualdad entre los sexos y las iniciativas presupuestarias a favor de los pobres, emprendidas en las dos últimas décadas, han demostrado que el impacto del gasto público y de diversos métodos de obtención de ingresos muy raramente son imparciales con respecto al sexo o la clase social. Hacer excesivas reducciones en los programas sociales, que aumentan directamente las capacidades humanas, es perjudicial para quienes viven en la pobreza. Sin embargo, los programas sociales mejoran las repercusiones que

4. Un documento reciente de los economistas del FMI, incluido el economista jefe, sostiene que en los países pobres, la integración financiera en la economía mundial no se traduce en crecimiento, y conduce a un aumento de la volatilidad del consumo y la producción. Aunque hay muchos economistas que han expuesto estos argumentos repetidas veces, esta es la primera vez que lo han hecho los economistas del FMI. Véase Prasad, Rogoff y Kose (2003).

la desigualdad entre los sexos tiene en los hogares y, por consiguiente, los recortes en estos servicios afectan a las mujeres y las niñas de manera desproporcionada. En situaciones extremas, la desigualdad entre los sexos se traduce en fallecimientos de mujeres. Por ejemplo, la desigualdad entre los sexos implica que en muchas sociedades es más probable que las mujeres y las niñas estén peor alimentadas que los hombres y los niños o que tengan menos acceso a la atención sanitaria. Se calcula que hay casi 100 millones de "mujeres desaparecidas" en todo el mundo (Sen, A.K., 2001). Teniendo en cuenta estos hechos, el Estado debe desempeñar un papel muy importante para compensar este sesgo de género, mediante la provisión de servicios sociales.

En la mayoría de los países, sean o no pobres, casi toda responsabilidad de cuidar a los enfermos (además de otras formas de trabajo asistencial no remunerado) en el hogar recae sobre las mujeres, lo que se traduce en otro tipo de sesgo por razones de género, que cabe observar en la desigual carga de trabajo que soportan las mujeres, en buena parte invisible en el análisis macroeconómico tradicional y en la formulación de políticas, puesto que esta última se centra en la economía monetizada. Los recortes en el gasto del Estado destinado a provisión social afectan a las mujeres de manera desproporcionada, debido a este trabajo no remunerado. Los recortes del Estado en el suministro de agua limpia constituyen un buen ejemplo. La falta de agua limpia es una causa de enfermedades y mala salud importante, tanto para las mujeres como para los hombres. Sin embargo, esta carencia tiene consecuencias adicionales para las mujeres y las niñas, ya que en los países pobres ellas son las responsables de ir a buscar agua.

2. OTROS GASTOS Y OBTENCIÓN DE INGRESOS

Existen otros muchos tipos de gasto y obtención de ingresos que repercuten igualmente en las mujeres y que agravan la desigualdad en las relaciones entre mujeres y hombres. Los recortes en el sector público tienen especiales implicaciones debido a la segregación entre los sexos en los mercados laborales. En algunas economías, antes el sector público daba mayores oportunidades de empleo a las mujeres que a los hombres. Fuera del ámbito público, puede que haya relativamente pocas oportunidades de

empleo que ofrezcan unas condiciones laborables análogas. La privatización ha supuesto grandes pérdidas de empleo y reducciones en el número de puestos de trabajo del sector oficial, por ejemplo en África y América Latina (van der Hoeven, 2000).

Los métodos de generación de ingresos, como las cuotas de usuario, o impuestos indirectos, como los impuestos sobre el consumo (que son menos progresivos que los impuestos sobre la renta) son sesgados por razones de clase para los segmentos de la población con menores ingresos, pero también son a menudo sesgados por razones de sexo. Esta situación se deriva de la mayor incidencia de "pobreza de ingresos" entre las mujeres en algunos países. También se debe a que las mujeres tienen menos ingresos que los hombres.

Sesgo por razones de género en las crisis económicas: el impacto sobre las mujeres

El impacto de las crisis y volatilidad económicas suele ser más grave para las mujeres. Hay varias razones para ello. La primera es la naturaleza de los sistemas de protección social. Estos sistemas son muy inadecuados tanto para las mujeres como para los hombres del hemisferio Sur, en parte porque las condiciones salariales del trabajo de las mujeres son peores y más inseguras que las de los hombres. Asimismo se debe a que los sistemas de seguridad social están pensados casi invariablemente partiendo del supuesto de que en las familias hay un hombre que se gana la vida con un trabajo del sector formal. (Elson y Çagatay, 2000). Sin embargo, lo más probable es que el trabajo de las mujeres pertenezca al sector de la economía sumergida y, por lo tanto, está fuera del ámbito de los sistemas de seguridad social actuales. También se da por supuesto que las mujeres que trabajan en tareas domésticas no remuneradas son las beneficiarias de la protección social que reciben los hombres de la familia. Así pues, hay menos mujeres receptoras de protección social que hombres (Naciones Unidas, 1999). Esta es una de las razones por las que ellas son más vulnerables a la pobreza y sufren una mayor inseguridad económica.

Aunque este desequilibrio se remonta al consenso keynesia-

no, el consenso de Washington ha añadido otro: el sesgo de la mercantilización (Elson y Çagatay, 2000). Esta mercantilización hace referencia a la existencia de una tendencia a la propiedad privada de los conocimientos, los seres vivos y los bienes que antes se proveían con fondos públicos o eran de propiedad común, una tendencia que actúa en detrimento de los pobres y, sobre todo, en detrimento de las mujeres.

Las crisis y la inestabilidad económicas se traducen en una enorme carga de trabajo adicional para las mujeres. En última instancia, son las mujeres quienes proporcionan protección social en casi todos los países en desarrollo en los que las redes de seguridad social son escasas. Amortiguan el impacto que los efectos negativos de las crisis económicas tienen en sus familias trabajando más, tanto en el hogar como fuera de él, para compensar la disminución de los ingresos privados y de servicios públicos. Su volumen de trabajo remunerado y no remunerado aumenta en términos absolutos y relativos en relación con el de los hombres.

Su papel de principales cuidadoras de sus familias conlleva que las crisis absorban una cantidad desproporcionada del tiempo y las energías de las mujeres. Su trabajo en el hogar (y a veces para toda la comunidad) aumenta porque dedican más tiempo a comprar, en un intento de estirar los presupuestos familiares, o a trabajar en casa para sustituir con productos elaborados en el hogar los productos que compran fuera. Además, es posible que a veces tengan que hacer frente a las crisis estableciendo "cocinas comunitarias", que les permiten obtener economías de escala, o dedicándose a otros tipos de trabajo comunitario (o voluntario).

Un tercer sesgo por razones de género se deriva del aumento de las disparidades de ingresos entre hombres y mujeres, ya que las mujeres se agrupan en los trabajos considerados femeninos, que suelen pertenecer a la economía sumergida. Un cuarto sesgo de género se produce cuando se saca a las niñas de las escuelas, y no a los niños, en los periodos de dificultades económicas con el fin de que cuiden de sus hermanos menores o a otros miembros de la familia, porque sus madres están buscando un trabajo remunerado. Es igualmente posible que saquen de las escuelas a un número desproporcionado de niñas cuando descienden los ingresos familiares, aunque el coste de la escola-

rización continúe siendo el mismo (es decir, no se han impuesto nuevas matrículas). Por más que los ingresos familiares se recuperen cuando la economía entra en un periodo de recuperación macroeconómica, las pérdidas educativas en que ya se ha incurrido no se solucionan fácilmente y provocan desigualdades permanentes entre mujeres y hombres.

Un quinto problema es que las crisis y la inestabilidad pueden llevar a la violencia social y doméstica porque se cuestionan algunos aspectos de las ideas de masculinidad, como la idea de que es el hombre el que mantiene a la familia. Esta situación puede traducirse en más violencia contra las mujeres, ya que los hombres intentan recuperar la sensación de poder y autoconfianza.

Democratizar la política fiscal y aumentar la responsabilidad con respecto a las mujeres

No obstante, durante las dos últimas décadas se han hecho grandes esfuerzos en todo el mundo por democratizar la política fiscal, en forma de iniciativas presupuestarias a favor de los pobres y en clave de género (Çagatay, Keklik, Lal y Lang, 2000). Estas últimas se centran principalmente en el gasto y no sólo analizan las asignaciones que el Estado destina específicamente a las mujeres, sino todas las asignaciones. Su objetivo es descubrir las diferentes repercusiones que tienen las asignaciones en las mujeres y los hombres, en niños y niñas (Budlender, Sharp y Allen, 1998; Commonwealth Secretariat, 1999). Estos análisis, que a veces van acompañados de análisis más extensos del marco macroeconómico, sirven después de base para la formulación de presupuestos equitativos para mujeres y hombres. Tales iniciativas tienen implicaciones políticas y económicas de gran alcance y constituyen unas herramientas muy importantes para que las mujeres y los pobres hagan asumir su responsabilidad a los gobiernos y puedan reivindicar recursos públicos.

Sin embargo, en el contexto de la globalización, no cabe considerar la política fiscal equitativa para mujeres y hombres solamente en el plano nacional o local. Hay que abordar estas cuestiones también en el ámbito internacional y garantizar una coherencia entre las dimensiones internacionales de la política

y los sistemas de defensa y las dimensiones nacionales y locales. Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las feministas, toman diversas posturas políticas (por ejemplo, en materia de tributación mundial, cancelación de la deuda, antimilitarismo y ayuda extranjera para el desarrollo); por ello, es necesario que la masa de las componentes de las organizaciones feministas que son más visibles y atraen más la atención apoyen estas posturas. Es necesario asimismo que haya más debate y diálogo sobre cómo plasmar estas posturas en modelos que sean más equitativos desde el punto de vista de género.

Existen varios grupos feministas, como DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era), que han participado en estos debates durante mucho tiempo. La clave en este punto no es la falta de un análisis feminista, sino más bien el afianzamiento de un sistema de sensibilización que se base en este análisis. Esto se puede lograr por medio de un mayor diálogo entre: a) las feministas que participan en las iniciativas presupuestarias nacionales o locales y las que abogan por ellas en el ámbito internacional; b) las feministas y otros grupos que se centran en la democratización de las políticas macroeconómicas (como los que se centran en los presupuestos a favor de los pobres o en otros tipos de formulación de políticas macroeconómicas progresistas en los ámbitos nacional y mundial, y c) entre las feministas que participan en las iniciativas presupuestarias del Sur y las que participan en las del Norte. A continuación, se explican brevemente algunos de estos ámbitos.

Tributación mundial y planes de redistribución

Las activistas feministas deben prestar más atención a planes como la tasa Tobin⁵ o la creación de un ente público de tributación mundial. Los ingresos generados por este tipo de tributación podrían ser una fuente importante de provisión universal de fondos públicos para servicios sociales básicos, entre ellos, atención sanitaria, educación, nutrición, saneamiento y agua, y

5. La tasa Tobin, propuesta inicialmente por el premio Nobel James Tobin, trata de reducir la volatilidad en la economía mundial, imponiendo un pequeño impuesto internacional a las transacciones de divisas. Sería una fuente de ingresos significativa que podría utilizarse con fines de desarrollo humano. Véase Haq, Kaul y Grunberg, 1996.

de fondos para llevar a cabo objetivos de equidad entre mujeres y hombres específicos de un país. Se podría conceder una parte de los ingresos a los gobiernos para que diseñaran sistemas de protección social equitativos para mujeres y hombres. Además, es muy probable que la tasa Tobin redujera la volatilidad del mercado (Erturk, 2002), un fenómeno que, como hemos visto más arriba, tiene unos efectos desproporcionadamente perjudiciales para las mujeres.

Campañas de cancelación de la deuda

Muchas feministas del Sur apoyan una cancelación incondicional de la deuda. Otras abogan por añadir a tales esfuerzos algunas condiciones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres. Incluso sin unas condiciones específicas asimiladas al género, la cancelación de la deuda beneficiaría a las mujeres, mientras fuera acompañada de una petición paralela de provisión universal de servicios sociales. Las mujeres tienen mucho que ganar, en comparación con los hombres, de una provisión de servicios universal ya que, como se ha explicado anteriormente, son las que más sufren la falta de tales servicios.

Redistribución del gasto militar para conseguir una reducción de la pobreza y la equidad social en el Norte y el Sur

Esta es otra petición importante que se presentó recientemente en Brasil. Las activistas feministas, que trabajan en los países desarrollados en iniciativas presupuestarias en clave de género, pueden exigir a sus gobiernos la redistribución de sus gastos militares para incrementar la ayuda extranjera para el desarrollo.

Oposición al radicalismo de las políticas antidéficit

Las activistas feministas deben oponerse al radicalismo antidéficit con más energía, junto con otros grupos. Hoy más que nunca, el peligro en la economía mundial no es la inflación, sino la deflación. Las valoraciones de equidad social y, más concretamente, las implicaciones de los contextos de política fiscal alternativos en la equidad entre hombres y mujeres y el crecimiento (incluidos los contextos con valoraciones alternativas del déficit presupuestario) pueden ser herramientas feministas significativas (Sen, G., 2000) para oponerse al radicalismo de las políticas

antidéficit. Estas valoraciones deberían integrar el análisis de género en la creación de modelos macroeconómicos.

Reivindicación de una mayor movilidad internacional de los trabajadores

Como se ha señalado anteriormente, una razón importante del desplazamiento de la carga impositiva entre mano de obra y capital se deriva de la relativa inmovilidad de los trabajadores en comparación con el capital. Esta asimetría ha provocado asimismo un deterioro de los derechos de los trabajadores. Las campañas de sensibilización feministas deberían incluir la exigencia de una mayor movilidad internacional de los trabajadores, además de peticiones para que aumenten los recursos nacionales e internacionales destinados a la protección de los derechos de los trabajadores (por ejemplo, en los planes de tributación mundial). Estas peticiones no sólo son importantes en sí mismas, sino porque repercuten en los modelos de tributación. Las campañas para eliminar los paraísos fiscales, que permiten a las empresas reducir sus impuestos, podrían constituir asimismo un frente más del activismo feminista para lograr una tributación equitativa de mujeres y hombres.

Conclusión

La defensa feminista en estos contextos políticos favorecería los esfuerzos encaminados a lograr una democratización de la formulación de políticas macroeconómicas en todos los ámbitos, desde el local hasta el internacional. Contribuiría a que las iniciativas presupuestarias en clave de género, que han sido el desafío feminista más importante en política macroeconómica hasta ahora, fueran más efectivas, al ayudar al desarrollo de una mayor solidaridad en el seno del movimiento por la justicia social.

Nilüfer Çagatay es profesora del Departamento de Economía, Dirección: 1645 Campus Center Dr., Room 308, BUC, University of Utah, EE.UU. 84112. Cagatay@economics.utah.edu

¡Hay que contar con nosotras! Reconocer la aportación de la mujer a la economía mundial por medio de sistemas alternativos de rendición de cuentas

Marilyn Waring

Como economista política, mi investigación y activismo siempre se han centrado en cómo se pueden utilizar los datos económicos para influir en las políticas públicas. Estoy muy familiarizada con los argumentos técnicos, logísticos y las mediciones que exponen tradicionalmente los estadísticos o los economistas en los debates sobre la recogida, presentación y atribuciones relacionadas con las estadísticas de datos desglosados por sexo. Además tengo muy poca paciencia con ellos. El presente artículo explica el porqué en el contexto de una crítica del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCNNU). Examina asimismo algunos métodos de cálculo alternativos que captan mejor las realidades de la aportación de la mujer a la economía mundial.¹ El nuevo reto feminista es identificar y utilizar estos modelos en la formulación de políticas y la sensibilización para el cambio.

Desde la Segunda Conferencia sobre la Mujer de las Naciones Unidas celebrada en Copenhague en 1980,² las feministas han adoptado estrategias para obligar a los organismos de contabilidad y auditoría nacionales y mundiales a poner de manifiesto en sus datos la contribución económica de la mujer. Un punto de atención importante ha sido el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCNNU). El SCNNU fue promovido en 1953 con el objetivo de facilitar las comparaciones entre econo-

1. El presente artículo incluye material de la introducción a la segunda edición de mi libro *Counting for Nothing - What Men Value and What Women are Worth* (1999), University of Toronto Press, Toronto.

2. El Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer tuvo lugar de 1975 a 1985.